

**LA RECUPERACIÓN SOCIAL
DEL TERRITORIO
EN LA SIERRA NEVADA
DE SANTA MARTA**

Introducción

El 7 de agosto de 2010, el Presidente electo Juan Manuel Santos realizó un acto de posesión simbólica en la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), previo a la posesión formal en la Casa de Nariño. El acto dejó entrever el interés estratégico del Gobierno entrante por intervenir en ese territorio golpeado por la violencia. A la fecha no ha sido tan visible dicha intervención, ni en materia de seguridad, ni de infraestructura, ni en función de las acciones tendientes a garantizar el retorno de la población desplazada ni la reparación de las víctimas de comunidades indígenas asentadas en la región. Debido al nuevo escenario estratégico de la confrontación en Colombia, los ojos del Gobierno, de los medios de comunicación y de la opinión pública, se han concentrado principalmente en los departamentos del Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó), en Córdoba y en los Llanos Orientales, en función de observar el impacto de las acciones armadas perpetradas por las FARC y la Bandas Criminales (BACRIM).

Este anexo, en consecuencia, pretende exponer brevemente un análisis sobre las dinámicas de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y el impacto de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) en la región. También, señalar algunas perspectivas de la intervención gubernamental en cuanto al interés expresado por el Presidente Santos ya hace más de un año.

Históricamente, la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) ha sufrido las consecuencias de las disputas entre grupos de guerrilla, narcotraficantes y grupos paramilitares, entre otros actores políticos y económicos soterrados, por ser considerada una zona de control estratégico para el tráfico de narcóticos en el país. También por la importancia que ha cobrado su particular ubicación geográfica y su gran variedad ecológica, en función del desarrollo de proyectos ecoturísticos e industriales de gran envergadura¹.

Después de la desmovilización del Bloque Norte de las AUC, en marzo de 2006, el Gobierno inició en la zona un plan de transición, tendiente a la “consolidación del Estado” en el marco de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, concentrando sus esfuerzos en la recuperación social del territorio, mediante la construcción de diez pueblos indígenas culturales que tienen como fin la conformación de un gran cinturón de protección y con-

servación ambiental, dado que para el Gobierno se habría logrado la fase de recuperación militar, expresada en la desmovilización de las estructuras de las AUC y la expulsión militar de las organizaciones guerrilleras que hacían presencia en la región.

En ese contexto, el paso a seguir, de acuerdo con la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (2006-2010), es el tránsito del control militar al control civil, en la perspectiva de consolidar la institucionalidad democrática, expresada en seguridad, inversión social y desarrollo.

El enfoque de la estrategia gubernamental se concentra en el trabajo conjunto con las cuatro comunidades indígenas que han hecho presencia en la zona: Kogui, Arhuaca, Wiwaa y Kankuama. En ese sentido el Gobierno y los líderes indígenas crearon un espacio de concertación del que ha resultado el diseño y construcción de diez “pueblos talanquera” entre los que se encuentran: Gunmaku de la comunidad Arhuaca, inaugurado el 14 de abril de 2007, Dumingueka, localizado en el municipio de Dibulla, departamento de la Guajira de los indígenas Kogui, Umuriwa inaugurado en Valledupar, el 20 de diciembre de 2008, Seykun en Valledupar, inaugurado el 20 de diciembre de 2008, Kankawarma, localizado en Fundación, y finalmente Kantinarwa, localizado también en el municipio de Fundación.

Según lo previsto por el Gobierno en la estrategia de “*Recuperación Social del Territorio*”, se ha intervenido directamente en los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira, en El Copey, Pueblo Bello y Valledupar en el departamento del Cesar, y en Aracataca, Ciénaga, Fundación y Santa Marta en el departamento de Magdalena. La iniciativa busca, además de consolidar la presencia militar y policial en los municipios de la SNSM, construir condiciones sociales e institucionales en zonas de difícil acceso con el fin de minimizar la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

La Sierra Nevada de Santa Marta fue una de las zonas focalizadas por el Plan Nacional de Consolidación (PNC), con el objetivo de que se generaran condiciones sociales para impulsar la estabilización y el desarrollo de las comunidades en un ambiente de paz. ¿Hasta qué punto la PCSD ha logrado sus objetivos estratégicos?

¹ “*Cuando la Madre Tierra Llora: crisis de derechos humanos y humanitaria en la Sierra Nevada de Gonawindúa 2003-2008*” (Bogotá: Fundación Cultura Democrática, 2009).

1. Historia y evolución de la población asentada sobre la SNSM

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) se caracteriza históricamente por albergar diversos sujetos culturales que dan cuenta de la prehistoria, el proceso de colonización, el mundo pre-capitalista, la República y el mundo moderno². En tal sentido, la SNSM expresa hoy la yuxtaposición y vigencia de distintos momentos del proceso de construcción del Estado en Colombia, en el marco de un proceso social específico caracterizado por la colonización y las dinámicas de resistencia indígena. Aunque se inscriban en fases distintas de la construcción del Estado, esas dinámicas nunca han estado al margen de procesos violentos. Posiblemente, debido a la incapacidad de consolidar un Estado garante de relaciones sociales justas, que se sustente en el monopolio de la violencia legítima. El Estado ha sido el gran ausente y cuando ha hecho presencia, ha expresado sus sesgos, sus favorecimientos y su parcialidad.

La población de Santa Marta fue establecida entre 1525 y 1526. Varios historiadores han señalado que los españoles carentes de recursos económicos contrataron a particulares para explotar económicamente esos territorios mediante un sistema de “capitulaciones”. Durante el comienzo de la colonización las relaciones entre aborígenes y españoles estuvieron marcadas por una tradición violenta, ya que principalmente mediante el empleo de la fuerza bruta los europeos se apropiaron de las riquezas de los indígenas y de su fuerza de trabajo. Sin embargo, los españoles se aprovecharían de las divisiones internas de los indígenas y por lo tanto la resistencia de los grupos no sería suficiente para expulsarlos de sus tierras.

A grandes rasgos, a la zona llegaron campesinos del interior que constituyeron el núcleo principal de colonización en ciertas poblaciones. También migraron pescadores del litoral y campesinos provenientes de otras regiones de la llanura costeña. La colonización en la Sierra Nevada ha sido por lo general espontánea, a excepción de los movimientos que se dieron con la llegada de una compañía de capital norteamericano que organizó una explotación agroindustrial cafetera en la zona de Minca desde la dé-

cada de 1910 y una colonización campesina dirigida por el gobierno nacional en la década de 1940.

El conflicto social en lo que se conoce como la Sierra Nevada de Santa Marta, se remonta a épocas de disputas de territorio entre indígenas con los herederos de los conquistadores españoles. Los primeros campesinos que colonizaron la zona lograron establecer la economía del café y de otros productos agrícolas comerciales. Sin embargo colonos más recientes solo lograron sembrar la tierra para producir alimentos para la supervivencia diaria (pancoger).

Los grupos indígenas nativos de la región son los Koguis (Kággaba), los Kankuamos (Atanqueros), los Arhuacos (Ika) y los Wiwas (Arasarios o Malayos). Estas comunidades han logrado preservar de manera más o menos completa todo el legado cultural de sus ancestros precolombinos, generalmente asociados con el pueblo responsable de la cultura arqueológica llamada Tayrona³. Esa postura de defensa del patrimonio ancestral, ligado profundamente a la tierra, no es solamente una actitud culturalista. Expresa claramente una posición política frente a la modernidad occidental, frente la incursión de diversos actores sociales e institucionales, que a la postre, han sido factores importantes para el uso sistemático de la violencia contra las poblaciones indígenas, aunque no de manera exclusiva.

Por otra parte, el asentamiento del campesinado se consolidó en la SNSM hacia los años sesenta y se caracterizó por la búsqueda de acumulación de capital mediante la tenencia de tierras y la producción agrícola, incluso la de la marihuana, con la esperanza de mejorar la calidad de vida. Adicionalmente, los colonos tradicionalmente intentaron apropiarse de la actividad económica de los indígenas.

Fue así como después de la crisis algodonera, asociada al incremento del contrabando que se dio en la Sierra, en especial en municipios del departamento de la Guajira, surgen desde 1965 cultivos de marihuana, que posteriormente culminaron con la ‘bonanza marimbera’⁴. Esta actividad, protagonista en la región por una década (1975-1985), generó la propagación de pequeños ejércitos privados que provocaron una atmósfera de violencia e inseguridad en la región⁵. Obviamente, sedimentando viejas disputas irresueltas e incubando nuevos conflictos.

² “Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Grupo de Investigación sobre Oralidades, Audiovisuales y Cultura Popular en Caribe Colombiano. Disponible en: http://oraloteca.unimagdalena.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=131

³ *Ibidem*.

⁴ Castillo, Fabio. *Los jinetes de la cocaína*. (Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1987).

⁵ *Informe de Riesgo No. 017-09 A.I*, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, 2009.

Adicionalmente, la década de 1970 corresponde también, en líneas generales, al período de la “guaquería”⁶ y de la expropiación de los indígenas por parte de los colonos. Posteriormente, en la misma dinámica llegaría a la región la siembra de hoja de coca y el narcotráfico, luego de intentos infructuosos por establecer dinámicas agrícolas sostenibles alrededor de la producción y comercialización del café y el algodón.

La aparición de los grupos guerrilleros en la zona se fomentó entre la década de los setentas y los ochentas, paralelamente a la aparición de cultivos ilícitos. Según informes de la Defensoría del Pueblo⁷, hacia el año 1985 se conformaron de manera paulatina las diferentes estructuras y frentes de las FARC, del ELN y del EPL (actualmente desmovilizado). El fortalecimiento de las guerrillas estimuló el surgimiento del grupo los ‘Los Chamizos’, dirigido por Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’, quien inició una campaña de aniquilamiento contra sectores de la población que consideraba afectados de la guerrilla. Como en otras regiones del país, los grupos guerrilleros pretendieron controlar la producción y tráfico de droga mediante el uso de la extorsión y el cobro de cuotas por seguridad. Ante esta situación, los narcotraficantes decidieron conformar ejércitos privados de protección frente a la amenaza guerrillera, involucrando desde el comienzo a la población civil.

Sin embargo, hay un escenario en el que se enmarcan estas disputas entre poderes emergentes de colonos, guerrilleros, narcotraficantes y terratenientes: el de la precaria y casi total ausencia de institucionalidad de un Estado moderno que permitiera regular los conflictos sociales e instaurar un orden social legal y legítimo. Por el contrario, el Estado, “domesticado por aristocracias parroquiales y provinciales”, atizó los conflictos sociales, favoreciendo a ciertos sectores políticos, sociales y económicos, en perjuicio de la mayoría de la población. La violencia estatal ligada a poderes privados es el principal factor de contención a las iniciativas de movilización social. Esta situación abre espacios de intervención a las organizaciones guerrilleras en proceso de expansión⁸.

En ese mismo contexto se consolidan también poderes mafiosos patriarcales, como el de Hernán Giraldo, con gran arraigo social. Giraldo, siendo desplazado de la violencia de Caldas y Tolima hacia 1958, se apropia de baldíos con familiares y amigos e inicia un proceso de construcción de un poder local de facto, ligado al poder político formal de ciertas familias prestantes de la región: Dávila, Lacotoure, Vives. Hay concesiones entre ejecivos privados (luego paramilitares) y la clase política. Los paramilitares entonces se constituyen “en actores económicos con poder de fuego”⁹.

Con el paso del tiempo el grupo paramilitar de Giraldo llegó a controlar una amplia región de la Sierra Nevada de Santa Marta, mutando su denominación de manera periódica por “Autodefensas Campesinas de El Mamey”, “Autodefensas Campesinas de la Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta”, “Autodefensas Campesinas de Magdalena y La Guajira”¹⁰. Este último grupo, en el año 2002, fue derrotado militarmente por el Bloque Norte de las AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, y desde entonces se transformaría en el “Frente Resistencia Tayrona”, al mando de Hernán Giraldo, quien se plegaría a las disposiciones de las AUC.

1.1. La población asentada sobre la Sierra

Según el último censo realizado por el DANE en el 2005, en los quince municipios localizados sobre la SNSM habitan un millón trecientos mil habitantes aproximadamente, de los cuales el 9% se reconocieron como indígenas. Adicionalmente, del total de la población el 18 % se encontraba localizado en zonas rurales y 82% en los cascos urbanos. Para el año 2010, según proyecciones municipales, habría un millón cuatrocientos setenta y siete mil personas aproximadamente.

La situación de pobreza es preocupante en esta zona del país. En municipios como Pueblo Bello el 83 % de su población vive en condiciones de miseria. En las mismas condiciones se encuentran municipios como Aracata y Dibulla, en los cuales el 64% y 66% de los habitantes, respectivamente, no están en capacidad de suplir sus necesidades básicas.

⁶ La “guaquería” o “huaquería” es entendida como una actividad ilegal de búsqueda, saqueo y comercialización de bienes arqueológicos. Incorpora prácticas de violencia de diversa índole como el saqueo, los asesinatos, el contrabando, etc. En “Forma y función en el oro Tairona”. (Banco de la República). Disponible en el sitio web: <http://www.banrepcultural.org/book/export/html/25908>

⁷ Informe Defensorial: Situación de orden público en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, febrero de 2002 e Informe de Riesgo No. 017-09 A.I, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, 2009.

⁸ Entrevista realizada a Fabio Silva, profesor de la Universidad del Magdalena. Santa Marta, diciembre de 2010.

⁹ Ibídem.

¹⁰ Informe de Riesgo No. 017-09 A.I, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, 2009.

FIGURA 1

POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA SNSM

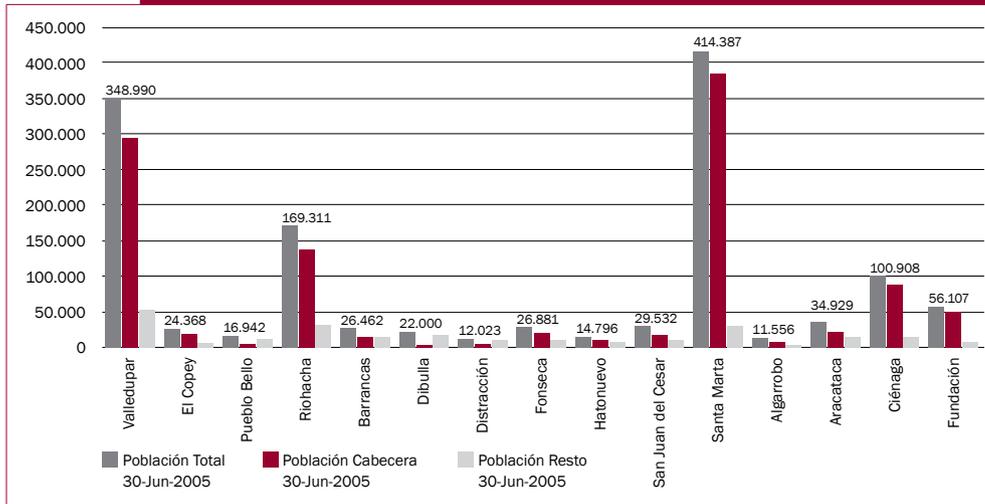


TABLA 1

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS POR MUNICIPIO¹¹

Nombre del Municipio	Personas en NBI		
	Cabecera Pro(%)	Resto Pro(%)	Total Pro (%)
CESAR_VALLEDUPAR	27,23	63,37	32,74
CESAR_EL COPEY	46,19	65,62	51,17
CESAR_PUEBLO BELLO	48,47	94,39	83,4
LA GUAJIRA_DIBULLA	39,36	71	66,52
LA GUAJIRA_SAN JUAN DEL CESAR	24,58	73,66	44,79
MAGDALENA_SANTA MARTA	27,39	49,72	29,03
MAGDALENA_ARACATACA	61,96	60,65	61,4
MAGDALENA_CIENAGA	40,74	63,59	43,81
MAGDALENA_FUNDACION	39,15	81,23	44,14

En general, pese a la creciente dinámica económica que involucra el narcotráfico y el turismo, la distribución de la riqueza ha sido precaria. La concentración de la riqueza, atravesada en todo caso por dinámicas de violencia, han sido los principales factores de desplazamiento forzado, usurpación de tierras, victimización y pobreza.

Incluso en la actualidad, pese a la recuperación parcial de la seguridad por parte del Estado y a la instauración de proyectos de ecoturismo, las poblaciones continúan sufriendo de condiciones preocupantes de miseria y pobreza, informalidad y desempleo.

¹¹ NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional a diciembre 31 de 2008, Resultados Censo General 2005.

2. Dinámicas del conflicto armado, violencia y narcotráfico

2.1 Evolución de conflicto armado¹²

Con la aparición de las estructuras paramilitares en la región, ubicadas en zonas planas, la guerrilla se vio obligada a desplazarse a las laderas del macizo montañoso. Las disputas entre grupos armados por territorios desataron una situación de violencia que impactó directamente a la población civil. No obstante, las guerrillas no dejaron de ejercer presión en la zona mediante acciones de sabotaje, secuestro y asesinatos.

Un análisis realizado por la Vicepresidencia de la República en 2006, se refiere a la Sierra Nevada como “una zona en la que las autodefensas pugnan por subir para golpear a las guerrillas en su retaguardia estratégica, mientras estas últimas organizan una resistencia férrea”¹³. Entre estas dos fuerzas estaban localizadas varias comunidades de campesinos, colonos e indígenas, quienes fueron víctimas de asesinatos selectivos, masacres, torturas, desapariciones y desplazamiento forzado.

Una primera arremetida de los paramilitares en la SNSM, se concentró en buscar el control territorial del departamento de Magdalena, control que posteriormente se extendería hacia los departamentos del Cesar y la Guajira. Las AUC fueron responsables del aumento de las cifras de violencia entre los años 2001 y 2003, años en los que las cifras de homicidio ascendieron considerablemente.

A lo largo del conflicto en la Sierra Nevada, las comunidades indígenas han sido las principales víctimas de la violencia. Por esta razón, actualmente, el Gobierno busca desarrollar un plan de sostenibilidad ambiental y de protección de comunidades indígenas. Durante el 2009 se apoyó el retorno de la población indígena de las comunidad Wiwas en San Juan del Cesar y Riohacha. El presupuesto asignado para esta zona, mediante el Plan Nacional de Consolidación (PNC), es de 18 mil millones de pesos.

2.1.1. FARC

Históricamente, el Bloque Caribe, después conocido como bloque Martín Caballero, ha hecho presencia en la

región de La Sierra Nevada de Santa Marta. Según fuentes oficiales¹⁴, la presencia de guerrilla en la SNSM data del año 1982, cuando se conoce que el frente 10 de las FARC, desde Pueblo Bello (Cesar), envía las primeras comisiones armadas con el fin de expandir su dominio hacia la Sierra¹⁵. En esta dirección, las FARC lograron penetrar en las poblaciones asentadas sobre la Sierra, que carecían de presencia estatal, combatiendo a las organizaciones criminales derivadas de la ‘bonanza marimbera’ y convirtiéndose en mediadores de conflictos entre familias y vecinos.

Paralelamente, las FARC iniciaron actividades en el departamento del Magdalena con el frente 19 entre 1982 y 1983, y posteriormente se diversificaron en diferentes frentes a orillas de los ríos Fundación, Piedras, Aracataca, Sevilla y Río Frío. El frente 19 de las FARC, con 35 hombres, planteó una estrategia de incursión en la vertiente norte y occidental de la SNSM que avanzó hacia el departamento del Cesar y definió como zona de retaguardia estratégica las comunidades indígenas. Más adelante, esta estructura del grupo guerrillero se dirigió hacia la Serranía del Perijá, en el norte del departamento del Cesar y se desdobló en el Frente 41 ‘Cacique Upar’.

En mayo de 1982 las FARC celebraron la Séptima Conferencia, donde definieron su futuro y su estrategia militar a largo plazo. Decidieron entonces multiplicar su pie de fuerza y movilizar por lo menos un frente por departamento. Esta expansión fue posible en parte por el boom de la cocaína y el cobro del impuesto al gramaje a los cultivadores y comercializadores de coca. Este nuevo flujo de dinero fue combinado con las formas tradicionales de financiamiento como la extorsión y el secuestro, en territorios ricos por actividades como la ganadería, la explotación petrolera (Meta, Caquetá, Córdoba), la agricultura (el Urabá bananero, sur del Cesar y Santander) y la explotación minera (Cesar, Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Santander y La Guajira). Las FARC también buscaron asentarse en las fronteras, en Norte de Santander y nuestra ZE del Caribe que limita con Venezuela, en el Putumayo que limita con Ecuador y Brasil, y en Urabá que comparte límites con Panamá.

Esta estrategia les abrió la oportunidad de salir del campo y poder enfocarse en ciudades pequeñas y medianas, y proyectarse desde su tradicional base de poder en

¹² Tomado de informe elaborado por INSIGHT FIP en Mayo 2010, MIMEO. Y con información de Sistema de Alertas Tempranas, Defensoría del Pueblo.

¹³ Informe del Observatorio del programa presidencial de DH y DIH. *Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sierra Nevada de Santa Marta*. Vicepresidencia de la República, 2006.

¹⁴ Vicepresidencia de la República y Defensoría del Pueblo.

¹⁵ Op. Cit. Defensoría del Pueblo, 2009.

el área rural. En 1995, el Frente 19, localizado en la Sierra Nevada y dirigido por Bertulfo Arias, logró suficiente poder para desdoblarse en un nuevo frente, el 59. Esto lo lograron a pesar de que los paramilitares empezaron a operar contra la guerrilla en el área.

El segundo grupo guerrillero más grande del país, el ELN, también buscaba expandirse durante los años 80. En 1983, la poderosa cuadrilla Camilo Torres Restrepo se dividió en cuadrillas más pequeñas. De igual forma, el ELN empezó a utilizar nuevos métodos para financiar sus actividades, luego de su cuasi-destrucción durante la “Operación Anorí” en Antioquia en 1973. Esto les enseñó a las guerrillas a no depender de una sola fuente económica, sino a redistribuir y repartir los recursos y el pie de fuerza. En Arauca empezaron a extorsionar compañías petroleras, lo que les permitió un incremento sustancial en sus ganancias. Y en el corredor entre la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá, empezaron a secuestrar y extorsionar a los lugareños.

El frente 19 de las FARC nunca descuidó su trabajo político con las comunidades. Por esta razón, en 1987, en la zona se presentaron multitudinarias marchas campesinas con el apoyo de las FARC. Así, en los municipios de Santa Marta, Valledupar, Ciénaga y Fundación, los campesinos exigieron al Gobierno la construcción de vías, la promoción de créditos bancarios blandos, la apertura de escuelas y puestos de salud¹⁶.

En 1994 surge de los frentes 19 y 41 el frente 59 “Resistencia de la Guajira”, al mando de ‘Leonardo Guerra’. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, la Décima Brigada del Ejército calculó que para 2009 esta estructura estuvo conformada por 136 guerrilleros ubicados mayoritariamente sobre la Serranía del Perijá, y solo un pequeño grupo hizo presencia en la SNSM. Actualmente, Abelardo Caicedo, alias ‘Solís Almeida’, jefe del frente 19 de las FARC, ha sido encargado de recuperar el corredor Córdoba-Antioquia-Bolívar, un corredor estratégico para las FARC¹⁷.

Estas actividades empezaron a golpear la seguridad y la estabilidad de la economía regional. Las amenazas extorsivas, en particular, ahuyentaron a los inversionistas de la región. Los grandes empresarios del agro se convirtieron en blanco fácil de la guerrilla y fueron golpeados por los costos sociales y económicos del conflicto.

Como respuesta a las insuficientes acciones de la Fuerza Pública, los grandes comerciantes y terratenientes empezaron a buscar estrategias para aliviar la presión de las guerrillas. De esta manera surgió el Bloque Norte de las Autodefensas, comandado por Jorge 40, uno de los paramilitares que más injerencia logró en la región Caribe hasta el proceso de desmovilización en 2005. Otro líder clave fue Hernán Giraldo, alias el Viejo, cuyo nombre aún causa temor en las regiones cercanas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Hasta antes de su desmovilización, la ofensiva paramilitar contra la guerrilla logró su expulsión de ciertos territorios claves.

Evidentemente, la estrategia contrainsurgente promovida por ganaderos, comerciantes y otros sectores sociales y económicos, se acompañó por el interés de los narcotraficantes de evitar y contener también el impacto de la presión de las FARC. Como en otras dinámicas paramilitares, el narcotráfico se encuentra como telón de fondo, como poder oculto o explícito, como factor de organización y financiación de la violencia.

Según fuentes militares¹⁸, actualmente el frente Martín Caballero ha reducido su poderío militar notablemente, y sus frentes se encuentran diezmados y confinados a zonas periféricas en donde la densidad de población es muy baja. No obstante, el frente 59 podría tener la capacidad de llevar operaciones ofensivas relevantes principalmente en La Guajira. Pero su actividad no tiene incidencia alguna en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde no se registra ninguna acción guerrillera desde 2004. Esto evidencia una retirada, o por lo menos un repliegue de las FARC desde el occidente de la Sierra, en el departamento de Magdalena. En este sentido, según fuentes militares consultadas en la zona, la mayor parte de la actividad guerrillera se percibe a lo largo del límite entre los departamentos de Cesar y Magdalena.

Además, con la reducción del control territorial y el acceso a fuentes de financiación, y al mismo tiempo con la reducción de los cultivos ilícitos, se estima que esa estructura armada tiene un flujo económico insuficiente para mantenerse activo. Sin embargo, sus fuentes de ingreso provienen en alguna medida de su actividad ilegal en Venezuela, en donde se especula que se encontraría “Iván Márquez”, miembro

¹⁶ Ibídem.

¹⁷ “‘Cano’ ordena ‘recuperar’ seis corredores estratégicos para las FARC al costo que sea”. *El Tiempo* [en línea] Sec. Justicia, 19 de enero de 2010. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6981291> (Fecha de consulta 15 de septiembre de 2010)

¹⁸ Comunicados de prensa y monitoreo de noticias de la Décima Brigada del Ejército.

de Secretariado de las FARC y líder político del frente Martín Caballero. Asimismo, con el objetivo de recuperar el control territorial que ostentaban en el pasado, las acciones del frente están enfocadas en mantener los corredores de movilidad hasta la Sierra Nevada, desde la Serranía del Perijá, para tener contacto con los milicianos y así poder volver a reubicar sus frentes en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta e incluso, volver a los Montes de María.

En ese contexto, actualmente en la SNSM hace presencia el frente 19 con un pie de de fuerza de tan solo 58 guerrilleros, de los cuales 27 se encuentran actuando en la zona. No obstante, la posición del frente en zona fronteriza con Venezuela favorece su fortalecimiento. Por otra parte, el frente 59 de las FARC, a partir del año 2008, incrementó su accionar en la zona buscando recuperar el territorio que perteneció a los grupos de autodefensas y paramilitares, actuando en Unidades Tácticas de Combate (UTC)¹⁹. En razón a lo anterior, en la Troncal del Caribe se han reportado enfrentamientos entre bandas criminales y esta estructura del grupo guerrillero. La presencia del frente 59 en el departamento de La Guajira se circunscribe al sector del corredor minero que incluye los corregimientos de Tigreras, Choles, Matitas, Arroyo Arena y a la franja de asentamientos de comunidades afrodescendientes, en el corregimiento de Camarones en Riohacha.

No obstante, ante la arremetida guerrillera sobre la Sierra, las unidades de la fuerza pública han desplegado operaciones importantes con el fin de evitar el desplazamiento de los guerrilleros. En mayo de 2010, la Fuerza Pública dio de baja a uno de los comandantes del Frente 59, lo cual fue un golpe contra la intención de las FARC de reconstruir una red de inteligencia, y fue limitada nuevamente la actividad guerrillera en la SNSM.

En todo caso, continúan existiendo reductos del frente 37 de las FARC, quienes debido a la ofensiva militar del Estado, se han visto en la obligación de replegarse hacia las partes altas de la SNSM, desde donde continúan con acciones de hostigamiento contra poblaciones indígenas y asentamientos de colonos y campesinos.

2.1.2. ELN

El ELN incursionó en la SNSM a principios de los noventa con el frente Francisco Javier Castaño. En el 2001 en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira ha-

cían presencia cinco cuadrillas: Gustavo Palmesano Ojeda (en La Guajira, 35 hombres), Seis de diciembre (Cesar, 60 hombres), Luciano Ariza (La Guajira, 130 hombres), José Manuel Martínez Quiroz (Cesar, 170 hombres, aunque parte de esta Cuadrilla operaba al sur del Cesar) y Francisco Javier Castaño (Magdalena, 80 hombres). Había también dos compañías: Guerreros de Chimilá (Cesar, 30 hombres) y Héroes de las Bananeras (Magdalena, 40 hombres).

Sin embargo, en el 2009 se reportó la presencia de los frentes Gustavo Palmesano Ojeda (en la Sierra Nevada de Santa Marta) y el Francisco Javier Castaño (en Aracataca y Fundación). En la actualidad se presume que el ELN cuenta con un pie de fuerza de 60 hombres que hacen presencia en los tres departamentos. Aunque en algún momento esta zona fue una de sus fortalezas, actualmente el ELN no es un actor significativo en la dinámica del conflicto armado en la región, pues su incidencia es nula debido al deterioro militar producido por la ofensiva paramilitar y las acciones militares de la fuerza pública.

Actualmente, tanto el ELN como las FARC tienen muy poco poder y control territorial comparado con el que tenían anteriormente. Fue a lo largo de la Costa Caribe que las guerrillas recibieron los golpes más duros, en parte porque la comunidad en general fue más simpatizante de los paramilitares que de la guerrilla. En la Universidad del Magdalena en Santa Marta, por ejemplo, las guerrillas no tienen presencia de ningún tipo ni penetración en las organizaciones estudiantiles o políticas (a diferencia de otros campus universitarios). Esto significa que los guerrilleros no tienen milicianos que recluten a estudiantes, ni hay evidencia de una red de inteligencia significativa en la región que les permita anticipar acciones de la fuerza pública y restablecer su presencia. No obstante, los guerrilleros tienen una gran ventaja en la zona: la cercanía de Venezuela²⁰.

2.1.3. Autodefensas

En la SNSM actuaba recientemente el Bloque Norte de las AUC, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', a través de los frentes Mártires del Cacique de Upar, que delinquía en el municipio de Valledupar, el Frente Bernardo Escobar, en la zona rural de los municipios de Fundación y Aracataca, el Frente William Rivas, en los municipios Ciéna-ga, El Retén, Pueblo Viejo, Zona Bananera, Aracataca y Fundación, el Frente Resistencia Wayuú, en zona de la Guajira,

¹⁹ Las UTC son la mínima unidad militar de las FARC, después de la Escuadra que es la unidad básica. Esta compuesta por 3 o 4 hombres dedicados a operaciones de inteligencia, rastreo, etc.

²⁰ Entrevista realizada a Leonor Zabaleta, líder de pueblo indígena en la SNSM.

y el Frente Resistencia Chimila, en el sur de la Sierra Nevada, en los municipios de El Copey, Bosconia y Pueblo Bello.

El “Frente Resistencia Tayrona” al mando de Hernán Giraldo, tuvo una fuerte incidencia en la región. Como consecuencia de su accionar se han conocido centenares de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, entre otros tipos de violencia, en el marco de las versiones libres del proceso de Justicia y Paz que se implementa desde su desmovilización. Los ex integrantes desmovilizados han confesado 715 hechos, de los cuales el 70% son asesinatos y el resto desapariciones, desplazamiento forzado, hurto de vehículos, de propiedades, de ganado, fincas y equipos²¹.

Sin embargo, inmediatamente después de desmovilizado el “Frente Resistencia Tayrona de la AUC” surgieron dos grupos sobre todo en territorio de Dibulla y Riohacha conocidos como el “Frente Arhuaco” y las “Autodefensas Campesinas Independientes”, integrados al parecer por mandos medios desmovilizados de las AUC. Posteriormente en la zona surgieron bandas criminales, autodenominadas como las ‘Águilas Negras’ quienes serían el mismo grupo conocido como las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ que empezaron a tener un impacto importante hacia octubre de 2008²².

En la zona también apareció la banda “Los Nevados”, que estuvo al mando de los hermanos Mejía Múnera, conocidos como ‘Los Mellizos’, narcotraficantes “puros” quienes al parecer compraron una especie de franquicia del Frente “Resistencia Tayrona” a Hernán Giraldo, con el fin de mantener el control sobre los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico en la zona. También para intentar “colarse” en el proceso de DDR implementado por el Gobierno desde 2002, haciéndose pasar por organización paramilitar y “lavar” su prontuario narcotraficante. No obstante, después de la muerte de Víctor Mejía Múnera y la captura de Miguel Mejía Múnera hubo un debilitamiento de esta banda, que finalmente se adheriría a la banda de ‘los paisas’ articulada a la ‘Oficina de Envigado’, que a su vez se derivó del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, que operaba en zona rural de Antioquia principalmente.

2.1.4. Bandas Criminales Emergentes (Bacrim)

Actualmente en Dibulla y Riohacha hacen presencia cuatro Bacrim: ‘Los Paisas’, ‘Los ‘Urabeños’, ‘Los Rastrojos’ y ‘Las Águilas Negras’. Según el informe del SAT de julio de

2009, del total de la población de Riohacha y Dibulla en el departamento de la Guajira, alrededor de 83.094 habitantes de estos municipios se encuentran en riesgo debido al accionar de estos grupos. Entre este número de pobladores además se encuentran los resguardos indígenas Wayuú, Kogui, Malayo y Arahuaco²³.

El riesgo está caracterizado por la confrontación entre esas bandas criminales, principalmente ‘Los Paisas’ y ‘Los urbeños’, que hacen presencia en estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y se disputan el control sobre corredores estratégicos de movilidad relacionados con el tráfico de drogas. No obstante, el informe realizado por la Defensoría del Pueblo denuncia que estos grupos armados en busca del control territorial y la subordinación de la población han desplegado una estrategia de terror en diferentes zonas.

En territorios del departamento de la Guajira, se han evidenciado denuncias de la población sobre reclutamiento de jóvenes y menores de edad por parte de estos grupos, que al parecer ofrecen tentadoras ofertas económicas y actualmente presionan a miembros desmovilizados de las AUC para que se integren a sus organizaciones criminales. Adicionalmente, en la zona se vienen presentando asesinatos selectivos, relacionados con la llegada de hombres procedentes de los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Para la Defensoría del Pueblo, el fenómeno Bacrim está asociado a las limitaciones fácticas del proceso de desmovilización de las AUC. Considera que es un fenómeno de reestructuración armada de reductos paramilitares no desmovilizados, de desmovilizados reincidentes y de nuevos grupos. Los principales criterios para la asociación con el paramilitarismo de las AUC son: a) se localizan en sitios donde operaron las AUC, b) pretenden mantener el control social, político y económico sobre poblaciones civiles antes controladas por las AUC, d) su pretensión es mantener el control del negocio del narcotráfico (cultivos de uso ilícito, cristalizaderos y rutas), y d) algunos mandos medios de las AUC hacen parte de las Bacrim²⁴.

Llama la atención que aunque la Defensoría del Pueblo ha señalado la existencia del riesgo en tres Informes de Riesgo entre 2009 y 2010, el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), no ha producido las alertas correspondientes para generar las respuestas institucionales necesarias.

²¹ Información de la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz, Fiscalía General de la Nación, www.fiscalia.gov.co

²² Informe del Área de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) “*Disidentes, Rearmados y Emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?*”. Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007.

²³ Entrevista realizada a analista del Sistema de Alertas Tempranas del departamento del Magdalena. Santa Marta, diciembre de 2010.

²⁴ Ibidem

Las Bacrim operan en dos niveles. El primero es el de las estructuras jerárquicas, con una cúpula que lidera la organización. Este es el caso de los Urabeños, compuesto principalmente por ex paramilitares, con entrenamiento militar y el de los Rastrojos, compuesto por narcotraficantes cuyas raíces están en el desaparecido cartel del Norte del Valle. Los líderes son organizados y se encargan de las operaciones más sofisticadas, especialmente las que tienen que ver con el tráfico de cocaína.

En el segundo nivel se encuentra la base, delincuencia común reclutada y persuadida por las Bacrim de primer nivel, muchas veces con dinero o por amenazas. Este nivel maneja una lealtad relativa, y poca organización o entrenamiento. Los delinquentes de este nivel se dedican a realizar tareas para la cúpula y deben autofinanciarse. En ocasiones reciben pago en cocaína o pasta base de coca, pero se dedican sobre todo al micro-tráfico y a la micro-extorsión para sobrevivir.

El segundo nivel de operaciones se forma en el momento en que algún lugarteniente de las Bacrim llega a un territorio determinado para reclutar a la delincuencia común de esas ciudades (bandas urbanas) o pueblos. La principal misión es asegurar el acceso a cultivos ilícitos, corredores de movimiento y puntos de salida para los cargamentos de cocaína. Los lugartenientes contratan a las redes criminales locales y usan el nombre de la franquicia para llevar a cabo de manera independiente el tráfico de droga.

No obstante, estas pequeñas bandas delincuenciales trabajan al servicio del mejor postor, lo que significa que su lealtad hacia la Bacrim que las reclutó no está garantizada. En un caso reciente en Barrancabermeja, Santander, hubo un cambio operacional cuando los Rastrojos no pudieron pagarle a sus bases por más de cinco meses. El dinero destinado para ello había sido incautado en el puerto de Buenaventura. Esta situación fue aprovechada por los Urabeños que reclutaron a estos delinquentes ofreciéndoles el dinero en efectivo. Fue así como de un día para otro los Urabeños ganaron un contrapeso importante para el control de ese Puerto Petrolero, crucial para el tráfico de drogas que viene desde el Sur de Bolívar, Santander y las rutas de Antioquia y el Magdalena Medio.

Este nivel bajo de operaciones en las Bacrim tiene un riesgo adicional a la falta de lealtad y confianza. Puede que se sientan lo suficientemente fuertes y autónomas para hacer el salto y convertirse en organizaciones criminales autónomas que busquen exportar cocaína en las “ligas mayores” del negocio. Esto es una constante en el mundo del hampa y uno de los generadores principales de violencia y homicidios. En algunos casos, un grupo delincencial se

vuelve lo suficientemente fuerte y rompe relaciones con la Bacrim que lo “apadrina” y empieza a operar como una entidad independiente, controlando pequeñas actividades criminales y quedándose con las ganancias en su totalidad. Sólo hacen el salto al negocio de la cocaína cuando tienen conexión con compradores internacionales, lo cual no es fácil. La forma de pago es que la cúpula se encarga del pago de la estructura armada y de ese núcleo alto, el primer nivel; mientras que del segundo nivel se encarga un lugarteniente que es el que recibe las ganancias del micro-tráfico y la micro-extorsión y luego la reparte a la base, los sicarios y la red de inteligencia.

Muchas de las Bacrim ya tienen una red de inteligencia establecida en la región de la SNSM, principalmente compuesta por moto-taxistas y jornaleros, al igual que por miembros de la comunidad indígena. Estos informantes callejeros son una fuente confiable para los comandantes de las cúpulas sobre lo que sucede dentro de su territorio. En general, las Bacrim tratan de evitar enfrentamientos con la Fuerza Pública y se inclinan más por el uso de las pistolas y no los rifles de combate, que sí usaban sus predecesores paramilitares, aunque tienen acceso a armas de mayor calibre si alguna operación requiere su uso.

Es poco probable que las Bacrim tengan la posibilidad de lograr un control social y político, como lo hicieron las AUC. Esto se debe a que se dedican exclusivamente al narcotráfico y a producir dinero, y también porque esta nueva generación de grupos “paramilitares” tiene menos espacio de maniobrabilidad política y no han infiltrado las clases altas del poder político, ni han logrado ejercer el control total de su territorio. Esto puede cambiar, pero únicamente como respuesta a sus intereses comerciales. Si necesitan de mayor control social o político para proteger sus intereses, las Bacrim perseguirán estos objetivos para seguir adelante en sus negocios, que son de los más flexibles y ágiles del mundo, y en donde el flujo de dinero no tiende a ser un problema.

Otra diferencia fundamental con el modelo de las AUC es que todas las finanzas no se mueven de arriba hacia abajo, ya que la clase baja de los criminales tiene su propia fuente de ingresos.

Si bien la penetración institucional de estas Bacrim es reducida, en todo el territorio de la SNSM hay cabida para que se replique el modelo de las AUC, especialmente en términos del ejercicio de control social en algunas áreas. Panfletos amenazadores, que aún son distribuidos, alertan de una “limpieza social” en los barrios, una táctica usada por las AUC frecuentemente para anunciar su llegada a un área o para reforzar su control. Es claro que en muchas maneras

las Bacrim siguen siendo capaces de intimidar a la población marginal. Aunque no son tan capaces de permear la clase política, esto no significa que sean incapaces de proyectar una agenda política eventualmente (e influenciar en las elecciones nacionales y regionales).

3. Cifras recientes sobre las dinámicas de violencia

Según los registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, uno de los departamentos más afectados por el desplazamiento forzado entre 1998 y 2007 en Colombia fue Magdalena, siendo Santa Marta y Ciénaga los municipios con las cifras más altas de desplazamiento. Entre 1998-2002 fueron desplazadas de Santa Marta 24.521 personas y 11.036 personas de Ciénaga, y entre 2003-2007 fueron desplazadas 19.399 y 9.703 personas.

En el departamento del Cesar, el municipio más afectado es Valledupar, que presenta registros de 14.193 personas desplazadas entre 1998-2002 y 13.386 entre 2003-2007.

Del año 2007 al año 2010 el desplazamiento se redujo notablemente en la SNSM. En los municipios intervenidos por el Plan de Consolidación (El Copey, Pueblo Bello, Valledupar, Dibulla, San Juan del Cesar, Aracata, Ciénaga, Fundación y Santa Marta), de un total de 21.349 desplazados registrados en Acción Social para el 2007, en el 2010 se reportaron 1.074 casos de desplazamiento.

FIGURA 2

DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EXPULSIÓN EN LA SNSM (1997-2010)



Fuente: Acción Social de la Presidencia de la República

3.1. Homicidios

Según el informe *Forensis*, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 2008 el municipio de Fundación, departamento del Magdalena tenía una tasa de 86 homicidios por cada 100.000, la tasa más alta de este departamento. Por otra parte el informe señala que Dibulla tuvo una tasa de homicidios de 52, que se redujo considerablemente, pues durante el 2007 fue de 138, además Riohacha y San Juan del Cesar son los municipios de la Guajira con las tasas más altas por homicidio, de 40 y 48 respectivamente. En el caso del Cesar, la tasa de homicidio en Valledupar es de 32 y en Pueblo Bello es de 59.

FIGURA 3

CASOS DE HOMICIDIO ENTRE 1990-2005 EN LA SNSM

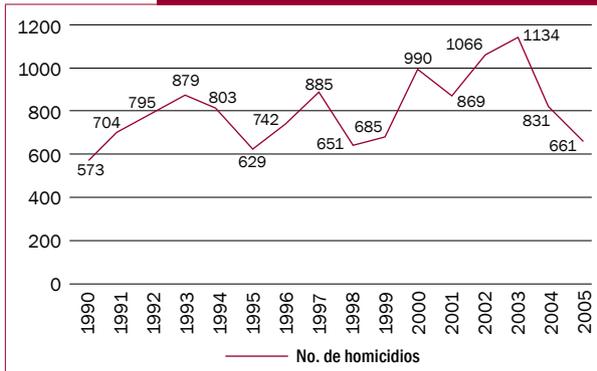


TABLA 2

HOMICIDIOS COMPORTAMIENTO REGIONAL

Departamento	2005	2006	2007	2008
Cesar	374	249	434	292
La Guajira	315	307	214	227
Magdalena	427	397	402	354

Fuente: FUCUDE (2009)

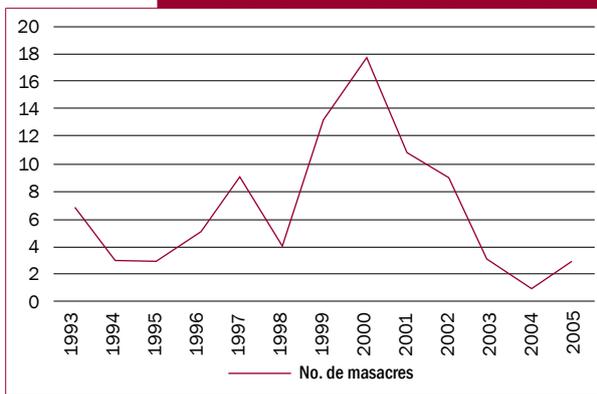
El impacto de la Política de Seguridad Democrática del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, ha logrado la disminución significativa de los homicidios a nivel nacional. Sin embargo, en regiones de disputa militar, ya sea de la fuerza pública contra grupos armados ilegales o entre estos últimos, se mantienen niveles considerables de violencia expresados en homicidios.

3.2. Masacres

Durante el accionar de los grupos paramilitares en la región se presentaron un número considerable de asesinatos colectivos y masacres. Según la Vicepresidencia de la República, en el Copey, entre 1998 y 2002 se registraron 3 masacres, en pueblo Bello 2, y en Valledupar entre 1998

FIGURA 4

MASACRES ENTRE 1993-2005 EN LA SNSM



Fuente: FUCUDE (2009)

y 2005 se presentaron aproximadamente 31 masacres. En el departamento de Magdalena, en el municipio de Fundación, se presentaron 16 masacres perpetradas por paramilitares, en Ciénaga 49, en Aracataca 8, en Algarrobo 1 y en Santa Marta 5. Por otra parte, en el departamento de la Guajira, en territorio de los municipios de nuestro interés se presentaron 45 masacres en el mismo periodo.

3.3. Acciones de la Fuerza Pública

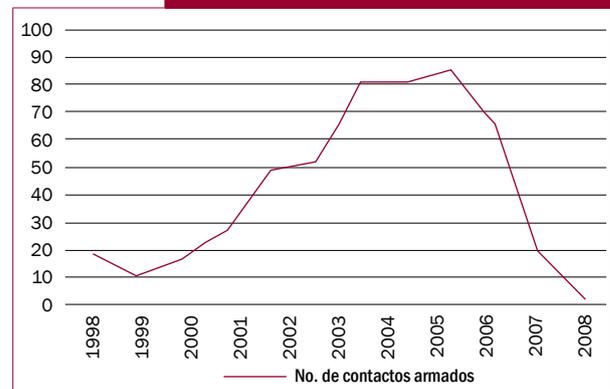
Durante el periodo de 1998-2005, en el municipio de Fundación se registraron 58 contactos armados iniciados por la fuerza pública contra grupos armados ilegales, en el municipio de Aracataca se registraron 28 enfrentamientos, en Ciénaga 92 y en Santa Marta 19, siendo Ciénaga y Fundación los municipios con mayor número de enfrentamientos del departamento. En el departamento del Cesar se registraron 74 enfrentamientos en Valledupar siendo el municipio con la cantidad más alta de todo el departamento, en Pueblo Bello se registraron 17 enfrentamientos y en El Copey 12 durante este periodo. Finalmente, en el departamento de la Guajira los municipios con mayor presencia de acciones de la fuerza pública fueron Riohacha y San Juan del Cesar, con 26 y 32 enfrentamientos iniciados por la fuerza pública contra grupos armados ilegales.

Se destacan en el Magdalena las operaciones realizadas desde 2006 por la Primera División del Ejército, el Batallón de Alta Montaña No. 6, la Fuerza de Tarea que opera en el municipio de Plato y el Batallón Córdoba, contra los frentes 35 y 37 de las FARC. También se ha dispuesto la ampliación de la presencia de la Policía Nacional en otros municipios del departamento.

No obstante, y ante la reticencia de la fuerza pública por aceptar abiertamente la existencia de Bandas Criminales, continuaban operando hasta 2010 en el norte del departamento estructuras armadas relacionadas con "Los

FIGURA 5

CONTACTOS ARMADOS ENTRE 1998 Y 2009 EN LA SNSM



Nevados” y con reductos del bloque de las AUC controlado por Hernán Giraldo. Las principales actividades de estos grupos armados ilegales giran en torno al narcotráfico y al control social (Ariguaní, Santa Marta, Guachaca y tramos de la Troncal del Caribe).

En Ciénaga, Fundación, Plato, Ariguaní y la zona bananera, ha aumentado la presencia de estas organizaciones, incluso perpetrando acciones de secuestro y amenazas contra personas y organizaciones que pretenden la restitución de tierras en el marco de los procesos judiciales de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).

3.4. Cultivos Ilícitos

Por otra parte, la presencia de cultivos ilícitos en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta solo representa el 0.4% de los cultivos en el país. Según Vicepresidencia de la República, los cultivos de coca han disminuido entre el 2002 y el 2007 en un 50%²⁵. Específicamente, durante el 2002 el área de la Sierra Nevada de Santa Marta tenía alrededor de 998 hectáreas con cultivos ilícitos, durante el 2004 habían cultivadas en la zona 1.262 hectáreas cifra que se redujo notablemente en el 2005, año en el que se registraron 542 hectáreas con coca. Finalmente al 2007 en la zona había presencia de 365 hectáreas con cultivos ilícitos²⁶.

3.5. Reclutamiento Forzado

En cuanto al reclutamiento ilícito, que comprende tanto el forzado como el motivado por algún ingreso económico o engaño, hay que decir que se está constituyendo en una estrategia adoptada por las bandas criminales, la cual afecta principalmente a jóvenes, niños y desmovilizados de las AUC en la SNSM. No solo existen denuncias en el departamento de la Guajira en el último informe de riesgo emitido por el SAT. También en el municipio de Valledupar desmovilizados se han acercado a denunciar que sus antiguos compañeros, en la mayoría de los casos pertenecientes a las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ están presionando para que se vinculen a estos grupos²⁷.

4. ‘Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta’, una estrategia para la consolidación de Estado

En el 2004, el Gobierno nacional diseñó el proyecto “Cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta”, como una estrategia cívico-militar para la recuperación del territorio con presencia de grupos armados ilegales. La iniciativa surgió como una respuesta gubernamental a la crisis humanitaria que vivía la región a causa del accionar de grupos paramilitares y guerrilleros y al impacto de estos sobre la población civil, principalmente contra los pueblos indígenas.

El proyecto de recuperación y protección integral de la Sierra Nevada fija sus bases en el reestablecimiento de los lazos de confianza entre las comunidades y la institucionalidad estatal, y en el diálogo intercultural. En diciembre del 2010, en el marco de esta estrategia amparada en el Plan Nacional de Consolidación, el Gobierno entregó ocho pueblos culturales indígenas, de los cuales siete se encuentran funcionando, uno se construyó y dos están en proceso de construcción con su financiamiento ya establecido. Adicionalmente, en la zona se implementó el programa de familias Guardabosques y se destinó un presupuesto de \$9.670 millones para el saneamiento y ampliación de resguardos indígenas, que concluyó con la compra de 8.200 hectáreas de tierra para dicho fin²⁸.

Según voceros del Gobierno nacional, esta iniciativa cuenta con tres fases de intervención. La primera, se centra en la construcción y puesta en funcionamiento de los diez pueblos indígenas culturales, la segunda, en el fortalecimiento de actividades de autoconsumo y producción, y la tercera enfoca sus esfuerzos en el saneamiento y ampliación de los resguardos indígenas. Dentro de los objetivos fundamentales del plan se encuentra: perpetuar la riqueza humana, cultural y ecológica de los cuatro pueblos indígenas: Kogi, Wiwa, Kankuamos y Arhuacos, prevenir el desplazamiento forzado, proteger la montaña costera más alta del mundo y la principal fuente de agua, promover la declaración

²⁵ Impacto de la política de Consolidación de Seguridad Democrática. Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República.

²⁶ Impacto de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y derechos humanos. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Vicepresidencia de la República. Agosto de 2008.

²⁷ Defensoría del Pueblo, Sistema de Alertas Tempranas, Registro de Información, 10 de julio de 2009, Valledupar, Cesar. Información brindada por la Mapp/OEA.

²⁸ Información obtenida a partir de la presentación de Sergio Jaramillo. 15 de diciembre de 2010.

de la Sierra Nevada de Santa Marta como santuario de paz, pactar las relaciones entre la cultura occidental y la cultura tradicional y fortalecer la estrategia de consolidación territorial a través de la ampliación y saneamiento del resguardo y el acceso y manejo de los sitios sagrados.

Hasta el 2010, el Plan de Consolidación en la SNSM había focalizado 5.618 núcleos familiares, quienes estaban recibiendo beneficios económicos y sociales asignados, en la mayoría de los casos, por Acción Social. Así, dentro de la oferta institucional que se despliega en la zona, los programas de retorno de la población desplazada y la estrategia de erradicación de cultivos son las iniciativas de mayor incidencia en la región. En cuanto a la población desplazada reubicada, la estrategia “Retornar es vivir”, entre el 2009 y 2010 acompañó el retorno de 1.519 familias (5.841 personas). Pueblo Bello, 66 hogares-132 personas; Valledupar 233-1.009; San Juan del Cesar 374-1.870; Aracata 657-2.056; Ciénaga 116-501; Fundación 73-273)

Por otra parte, en la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos, cuyos interrogantes se centran en la viabilidad de los planes de transición y el impacto de ellos sobre las economías campesinas y sus formas de sostenimiento, durante el 2010, el Gobierno registró la erradicación manual de 495,7 hectáreas de cultivos ilícitos. Cesar con 103,5 hectáreas erradicadas, La Guajira con 51,1 hectáreas y Magdalena con 341,1 hectáreas).

TABLA 3	
NUEVA INVERSIÓN CORDÓN AMBIENTAL SNSM	
ACTIVIDAD	INVERSIÓN
Compra de predios	\$ 21.050.284.353
infraestructura	\$ 16.772.529.193
Dotaciones	\$ 2.682.225.437
Proyectos Especiales (ReSA, ICBF, SENA, OPRS y ACIDI-VOCA)	\$ 3.978.826.422
TOTAL INVERSIÓN	\$ 44.483.865.405

Fuente: Presentación Sergio Jaramillo. 15 de diciembre de 2010

Sin embargo, se parte del hecho de haber logrado la recuperación total de la seguridad, que en la teoría de la Política de Seguridad Democrática debe ser condición imprescindible para la transición hacia la consolidación del Estado. Es interesante, por decir lo menos, la constatación del Gobierno de la recuperación de la seguridad, lo que implica la existencia de un escenario propicio para la recu-

peración social del territorio, mientras que organizaciones sociales, pueblos indígenas y otros actores locales relevantes, señalan la persistencia de factores de violencia que pueden obstaculizar, o por lo menos dificultar, el propósito de la consolidación.

4.1. Recuperación social del territorio en la Sierra Nevada

El antecedente principal de la implementación de la estrategia de recuperación del cordón ambiental de la SNSM, es la muerte del mamo Mariano Suárez, asesinado presuntamente por las FARC el 8 de noviembre de 2004. Este hecho fue la principal motivación del Gobierno para implementar en la zona el proyecto cultural y ambiental, que estaría precedido por una arremetida militar importante por parte del Ejército, que incluyó la construcción de una Batallón de Alta Montaña, en el 2004, en la parte alta de la SNSM.

La iniciativa de Recuperación Social del Territorio se aplica en zonas de transición para pasar del control militar al control civil del territorio en el marco de la estrategia de Acción Integral, base de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática. En ese sentido, para Diego Molano, Alto Consejero Presidencial y Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, un “ejemplo que permitió la recuperación en seguridad y el desarrollo y la protección del medio ambiente es el Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta”²⁹.

La construcción de los ocho pueblos indígenas ha sido producto de la concertación entre el Gobierno nacional y la autoridades indígenas, que incluyó aspectos como la ubicación, la arquitectura, la finalidad y la prestación de servicios como la educación, la salud y temas productivos. El proyecto pretende construir y poner en funcionamiento sostenible diez pueblos indígenas con el fin de impulsar en ellos actividades autoconsumo, producciones pertinentes y ampliación y saneamiento de resguardos.

Adicionalmente, según el vocero de Acción Social, actualmente las comunidades indígenas de la zona se encuentran implementando el proyecto “Guardabosques Corazón del Mundo”, con el fin de trasladar familias indígenas localizadas en zonas de la SNSM que a causa del conflicto se desplazan, y en su intento por reubicarse, deforestan la zona y afectan los nacimiento naturales de agua

²⁹ Molano, Diego. “Colombia: Recuperación Social del territorio para la superación de la pobreza” (10 de junio de 2010). Disponible en: <http://www.fondoespanapnud.org/2010/06/colombia-recuperacion-social-del-territorio-para-la-superacion-de-la-pobreza-diego-molano/>

dentro de la Sierra. Este programa además busca disminuir y erradicar pequeñas hectáreas de cultivos ilícitos que persisten y siguen siendo el motivo de la deforestación de la Sierra Nevada.

Según Acción Social, los pueblos indígenas tradicionales, Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos, que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, han comprado cerca de 6.000 hectáreas alrededor de los 'pueblos talanquera', en el marco de la estrategia de Recuperación Social del Territorio. Adicionalmente el Estado ha realizado una inversión importante en líneas estratégicas de la consolidación que han beneficiado a 1.190 indígenas.

No obstante los avances en materia social e institucional, las principales acciones que reconoce la población ligadas a la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD) son las de carácter militar. No existe solidez de las iniciativas gubernamentales de recuperación institucional, pues la violencia persiste en la zona y continúan los riesgos para las comunidades que habitan la SNSM.

De alguna manera, la recuperación social del territorio ha pretendido implementarse sin que exista una recuperación efectiva de la seguridad. Esta situación extiende los riesgos contra la población civil que colabora, participa y se beneficia de la oferta institucional de carácter social y económica del Gobierno nacional, que gravita en torno a los programas de Familias Guardabosques y Red de Cooperantes, que, pese a su alcance social y económico, son iniciativas ligadas a la estrategia militar del Estado en el marco de la Acción Integral que plantea la PCSD.

Para algunas comunidades, según las entrevistas realizadas, la Acción Integral supone en esencia el involucramiento de la población civil en las actividades militares del Gobierno, lo que afectaría el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario y multiplicaría los riesgos de las comunidades.

Sin embargo, la Acción Integral ha supuesto una oportunidad para la recuperación de la legitimidad de la fuerza pública, principalmente del Ejército Nacional, pues su implementación ha significado la participación en acciones y procesos comunitarios y de seguridad, logrando construir mayores niveles de confianza con las comunidades. Se destacan algunas campañas de salud y actividades lúdicas, que logran el acercamiento a la comunidad. A pesar de ello, persisten denuncias sobre algunas acciones de la Policía Nacional, principalmente, que supondrían uso de excesiva fuerza contra pobladores de la zona en actividades específicas como requisas y retenes.

Una crítica importante de las organizaciones sociales frente a la PCSD, es la precaria presencia del Centro de

Coordinación de Acción Integral (CCAI). Si en teoría es el CCAI quien debe concentrar la oferta gubernamental ligada a la recuperación social del territorio, esta no aparece con constancia y la institucionalidad continúa padeciendo niveles significativos de desarticulación y falta de coordinación. En ese escenario, las fuerzas militares son las principales expresiones de institucionalidad, pues tienen presencia permanente y han incursionado incluso en actividades de tipo civil. En consecuencia, el tránsito de lo militar a lo civil, tendiente a la consolidación de una institucionalidad coherente y articulada es apenas un buen propósito. Así mismo, esa ausencia replica las dinámicas de descoordinación entre la institucionalidad local y la nacional.

La consolidación del narcotráfico y el afianzamiento de las Bacrim son temas de particular importancia y se dan en un contexto de negación de la presencia y de los altos y negativos impactos de estas últimas en la parte norte del departamento. El microtráfico también es un nuevo síntoma de las dificultades regionales, pues además de implicar nuevos escenarios de violencia urbana y de vinculación de población joven al consumo de sustancias ilícitas, trastorna la lógica de liderazgo militar y exige nuevas competencias para la Policía Nacional, o por lo menos el análisis y operación conjunta en buena parte del territorio. En ese escenario de persistencia del narcotráfico, también se han señalado casos de corrupción de efectivos del Ejército y la Policía Nacional, lo que limita el alcance de la política nacional de lucha contra el narcotráfico y la ofensiva contra las Bacrim.

4.2. Los Pueblos Talanquera

Los 'pueblos talanquera' no son lugares de residencia de las comunidades indígenas, más bien se definen como espacios de intercambio cultural de las comunidades, en donde se propician encuentros religiosos y educativos, en los que se busca preservar la tradición cultural de los indígenas de la Sierra y conservar el ecosistema de la zona. También fueron diseñados por el Gobierno con el fin de detener el avance de la colonización en la Sierra.

Según Acción social, los pueblos se construyen con participación de las comunidades indígenas y ellos se identifican tres de espacios diferenciados:

- Espacio Sagrado: Con exclusividad para las actividades espirituales. A este lugar solo pueden ingresar las personas que han ganado la confianza y aquellos a las que la comunidad autorice.
- Espacio Comunal: Allí se concentran los servicios de energía alternativa, acueducto, educación, salud y restaurante escolar. Construidos con técnicas occidenta-

les; el tipo de obra, los diseños y los materiales fueron previamente concertados con la comunidad.

- Espacio Tradicional: Allí se encuentran las viviendas tradicionales y las casas ceremoniales. Este es el lugar del pueblo donde las construcciones mantienen la cultura tradicional.

Los pueblos están dotados con computadores, pupitres y otros instrumentos esenciales para ofrecer servicios de educación. Además fueron entregados con infraestructura y equipos médicos con los que se prestan servicios de salud básica. Sin embargo, en los ‘pueblos talanquera’ no viven comunidades indígenas, éstas se encuentran ubicadas en zonas de extrema pobreza, en donde persisten altos índices de necesidades básicas insatisfechas.

En algunos casos, los ‘pueblos talanquera’ pueden entenderse como una estrategia contrainsurgente por estar ubicados en zonas estratégicas para el ingreso, salida y movilización de grupos armados ilegales. En ese sentido, aunque existe una porción importante de líderes indígenas apoyando la construcción de estos lugares, los más acérrimos contradictores de la iniciativa aseguran que los pueblos están localizados en zonas en donde el accionar paramilitar tuvo una incidencia muy fuerte que concluyó con el desplazamiento de cientos de campesinos de la zona.

En otras palabras, al ser un proyecto que surge de una situación humanitaria muy compleja, líderes indígenas manifiestan que la ubicación de los pueblos se hizo en zonas de predominio paramilitar, en las que se cometieron un sinnúmero de crímenes y violaciones de derechos humanos contra los campesinos, lo que resulta contradictorio, si se percibe que la estrategia principal del Gobierno está enfocada en las comunidades indígenas y no en los campesinos. Este panorama se empeora si el Gobierno aún no resuelve la situación de los campesinos, legítimos propietarios de las tierras desplazados por la violencia paramilitar.

Asimismo, para los líderes indígenas críticos de la política gubernamental, la construcción de ‘los pueblos talanquera’ implica que, de cierta forma, se pretenda la dominación cultural de los indígenas de la Sierra y su occidentalización por la vía de su involucramiento en acciones cívico-militares.

En tal sentido un tema de preocupación es la relación entre campesinos e indígenas, y la inequidad de las políticas gubernamentales ante los dos tipos de poblaciones. Es decir, que mientras que se amplían las tierras destinadas para las comunidades indígenas se desplaza a la población campesina y no se atiende de acuerdo con sus necesidades prioritarias y urgentes. La inversión más representativa del Plan de Consolidación en esta zona se concentró en la construcción de pueblos indígenas y tiene como único destino las culturas indígenas que hacen presencia en la zona. Este supuesto ha sido conflictivo para las comunidades campesinas, quienes además representan un porcentaje muy importante de poblaciones vulnerables en la zona.

“...donde había un grupo paramilitar allí se construyó un pueblo de consolidación territorial, si ustedes retoman cada uno de los puntos en donde están ubicados los pueblos talanquera hubo muchísimos crímenes contra los campesinos, fueron muchísimos los desplazados que salieron de esos lugares...ese problema no está resuelto y sin estar resuelto tanto eso como legítimos propietarios o poseedores de esas tierras que no eran indígenas, que eran campesinos asesinados o desplazados, sobre estas tierras se les construye con la intervención del CCAI., entonces esa es la gran realidad prácticamente que tenemos todos los días...”

LEONOR ZABALETA, líder indígena de la SNSM

	BENEFICIARIOS	VIVIENDAS	EDUCACIÓN	SALUD	CUPOS ICBF	ReSA (Familias)
KANTINURWA	120	25	70	77	50	183
KANKAWARWA	200	18	320	115	250	400
SEYKUN	110	18	62	24	150	394
UMURIWA	300	18	59		60	394
GUNMAKU	120	39	180	249	200	206
DUMINGUEKA	250	60	220	223	280	672
MAKUGUEKA	90	32				400
TOTAL	1190	210	911	688	990	2649

Fuente: Reporte del PNC 2009

TABLA 5

NUEVA INVERSIÓN REGIONAL GESTIONADA POR EL PLAN REGIONAL DE CONSOLIDACIÓN

NUEVA INVERSIÓN APROPIADA 2009 PNC - SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA			
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA CONSOLIDACIÓN	EJECUTADO	EN EJECUCIÓN	TOTAL
Atención Humanitaria de Emergencia		\$ 74.400.000	\$ 74.400.000
Desarrollo Económico	\$ 11.000.000	\$ 4.712.292.354	\$ 4.723.292.354
Desarrollo Social	\$ 1.295.975.270	\$ 11.182.272.064	\$ 12.478.247.334
Gobernabilidad	\$ 1.769.461.624		\$ 1.769.461.624
Justicia y Seguridad		\$ 481.000.000	\$ 481.000.000
Total	\$ 3.076.436.894	\$ 16.449.964.418	\$ 19.526.401.312

Fuente: Reporte del PNC 2009

5. Inversión privada (Megaproyectos)³⁰

En el departamento de la Guajira en los municipios de Riohacha y Dibulla, actualmente se desarrollan proyectos portuarios, agroindustriales, camaroneros e incluso hidro-carburíferos³¹.

En Jurisdicción de Mingueo, en el municipio de Dibulla, se encuentra en construcción el Puerto Multipropósito Brisa. Este proyecto de naturaleza privada y servicio público incluye la construcción de un complejo siderúrgico y pretende adecuar 1.000 hectáreas para mover carga mineral del Cesar y la Guajira para el exterior. Debido a que en la zona de implementación del puerto se localiza el cerro sagrado Jukulwa, que forma parte del territorio ancestral indígena y para las comunidades asentadas en la zona representa una autoridad, el proyecto ha generado problemas e inconformismo entre las comunidades indígenas asentadas en esta zona. El 30 de Junio de 2006 el Ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Rural expidió una resolución otorgándole la licencia ambiental al proyecto, no obstante en octubre del mismo año el Ministerio ordenó la suspensión de la construcción del proyecto. Hasta el 30 de abril de 2008 se superaron los impasses con las comunidades indígenas asegurando el acceso al sitio sagrado³².

Durante el año 2009, los inconvenientes entre la empresa creadora del megaproyecto, Brisa S.A. y los grupos indígenas de la SNSM continuaron³³. Actualmente, la empresa Brisa S.A solicitó una modificación de la licencia ambiental

³⁰ Tomado de informe elaborado por INSIGHT FIP en Mayo 2010, MIMEO.

³¹ Op. Cit. Defensoría del Pueblo, 2009.

³² "Levantán suspensión a puerto multipropósito de Dibulla", *El Tiempo* [en línea], Sec. Otros, 12 de mayo de 2008. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4161240> (Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2010)

³³ "Controversia por acceso de indígenas a sitio sagrado". *El Tiempo* [en línea], Sec. Cultura, 15 de abril de 2009. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3399438> (fecha de consulta: 15 de septiembre de 2010)

con el fin de incluir dentro de su logística el embarque de carbón hacia el exterior. No obstante en su primera resolución el ministerio de Vivienda, Medio Ambiente y Desarrollo Rural excluyó en la licencia este producto material debido a que el puerto está ubicado en un área en donde convergen dos ecosistemas altamente sensibles³⁴.

Paralelo a este proyecto se encuentra en construcción la carretera que conectará a la Sierra Nevada con el interior del país. Además, en la zona que comprende los municipios de Riohacha y Dibulla se construirán 323 kilómetros de red férrea que unirá al departamento de la Guajira con la red férrea del Atlántico y la red férrea Nacional.

Adicionalmente en la zona se desarrollan proyectos camaroneros y pesqueros en el entorno de la Troncal Caribe en el municipio de Riohacha, zona en la que también se está trabajando en la construcción de una laguna de oxidación. Hacia el sur del departamento de La Guajira, en el municipio de San Juan del Cesar está en construcción de la represa del río Ranchería, que planea ser el segundo distrito de riego más grande del país.

Además, en la zona grandes extensiones de tierra próximas a la Trocal están siendo sembradas con monocultivos como la palma africana y el banano. Por esta razón y debido a la compra de tierra por parte de foráneos, según el informe del SAT, las tierras han sufrido un encarecimiento, dificultando la adquisición de estas para la población desplazada, indígenas o afrodescendientes.

Alrededor de la Troncal Caribe empresas petroleras como Ecopetrol y Silvestra D, están realizando labores de sísmica como parte de las actividades de exploración de hidrocarburos.

El Gobierno ha generado dos dinámicas diferentes en la región: en este sentido, impulsó en primer lugar el micro emprendimiento rural, con la implementación de proyectos productivos e involucrando a la comunidad en alternativas de empleo que incluyen procesos de capacitación y en segundo lugar la protección del patrimonio natural y cultural en la zona.

Como se hizo a lo largo del país, a los agricultores de coca se ofrecieron planes de transición, en los que, en algunos casos, fueron claves los extensionistas de la federación Nacional de Cafeteros. En este sentido según información recogida en la zona, en muchos casos los proyectos productivos con familias campesinas han funcionado

6. Presencia militar estatal después del 2004³⁵

En la región el Comando Conjunto No.1 'Caribe' es el encargado de llevar a cabo operaciones militares en toda La Guajira. Su sede se encuentra en la ciudad de Santa Marta. Bajo su dirección se encuentra la Primera División que está al mando de La Segunda Brigada y la Décima Brigada Blindada. Estas dos Brigadas son responsables de luchar contra las guerrillas y las Bacrim en la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada. Los esfuerzos militares principales se concentran en la Serranía donde buscan cortar el corredor de movimiento a los rebeldes que va hasta la Sierra Nevada.

Los Batallones que hacen parte de la Segunda Brigada (con base en Barranquilla) son los siguientes:

- Batallón de Infantería Mecanizado No 5 "GR. José María Córdova" en Santa Marta
- Batallón de Alta Montaña No. 6 "MY. Robinson Daniel Ruiz Garzón" en Fundación, se ocupa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Grupo Gaula Magdalena en Santa Marta

La Décima Brigada Blindada ha tenido varios logros en la lucha contrainsurgente, y por eso han disminuido notablemente las acciones guerrilleras en la región del Cesar. Su jurisdicción comprende 40,000 km² aproximadamente, en 32 municipios. Sin embargo, existen varias denuncias de complicidad de las unidades adscritas a la X Brigada Blindada con grupos de paramilitares para combatir a los grupos guerrilleros. Uno de sus principales batallones, el de Artillería No. 2 tiene varias investigaciones en su contra por casos de "falsos positivos" (donde elementos militares ejecutaron civiles y los presentaron como guerrilleros abatidos en combate).

Las unidades que componen la Décima Brigada Blindada (con base en el Cesar) incluyen:

- Batallón de Infantería Mecanizado No. 6 "Cartagena" en Riohacha
- Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 "CR. Juan José Rondón" en Buenavista su trabajo fundamentalmente es de contención, evitando que los rebeldes de los Frentes 41 y 19 avancen hacia el norte y cortándoles el

³⁴ "Puerto multipropósito de Dibulla le apunta al embarque de carbón". *El Tiempo* [en línea], 16 de abril de 2010. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4796210> (fecha de consulta: 15 de septiembre de 2010)

³⁵ Tomado de informe elaborado por INSIGHT FIP en Mayo 2010, MIMED.

paso del corredor entre la Serranía del Perijá y la Sierra Nevada.

- Grupo de Caballería Blindado Mediano “GR. Gustavo Matamoros D’Costa” tiene jurisdicción de 12,400 km². Han encontrado pistas clandestinas pertenecientes a alias Pablo en la Alta Guajira.
- Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” en Valledupar
- Batallón de Artillería de Campaña No. 10 “Santa Bárbara” en Buenavista
- Batallón de Ingenieros No. 10 “GR. Manuel Alberto Murillo González” en Valledupar
- Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 10 “Cacique Upar” en Valledupar
- Grupo Gaula Guajira en Riohacha
- Grupo Gaula Cesar en Valledupar
- Batallón de Alta Montaña No. 7 “MY. Raúl Guillermo Mahecha Martínez” en la Serranía del Perijá. Su objetivo, en conjunto con el Batallón de Alta Montaña No. 6, es ocupar las tierras altas que anteriormente controlaban las guerrillas y cortar los corredores de movimiento.

El Plan Nacional de Consolidación, la nueva fase de la Política de Seguridad Democrática, se encuentra en curso y es de gran importancia debido a que el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha convertido a la seguridad fronteriza en una prioridad. El plan incluye la extensión de redes de telecomunicación que, según la Defensoría del Pueblo, habrían sido descuidadas por parte del gobierno central.

En tal sentido, el Ejército estaría pensando en la construcción de una base en inmediaciones a Nazareth, y también fortalecer una base antinarcóticos en Puerto Estrella, Uribia. Una de las misiones principales de las Fuerzas Armadas en la región es la protección de la infraestructura productiva.

Existen 4 subestaciones eléctricas en Mingueo y Polvorín en La Guajira, y Valledupar y Bosconia en el Cesar. Están los ferrocarriles operados por Cerrejón, en La Guajira, y el de Drummond, que va del Cesar hasta el Magdalena. Hay un oleoducto que va desde Barrancabermeja hasta Ballenas en La Guajira, y un gasoducto que va desde Ballenas hasta Venezuela. También se encuentra el oleoducto de Caño Limón-Coveñas que recorre 110 km; y la represa del Río Ranchería en La Guajira, que se encuentra en construcción. Adicionalmente, está la Planta de las Flores que es un complejo industrial donde se elaboran biocombustibles y las minas de sal de Manaure en el norte de la Guajira, donde se produce el 80 por ciento de la sal que consume el país. En total, hay 474 kilómetros de vías terrestres dentro de nuestra ZE.

7. Conclusiones

Más allá de las buenas intenciones para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas y los campesinos, golpeados fuertemente por la violencia en todas sus manifestaciones, la Política de Consolidación en la SNSM articula dinámicas estratégicas ligadas fundamentalmente a proyectos de inversión en relación con la explotación de recursos naturales y el turismo.

En ese contexto, la intervención gubernamental (que no estatal), está expresada principalmente en términos militares. La seguridad es una condición necesaria para el desarrollo de dinámicas económicas a gran escala. Las relaciones institucionales con poblaciones indígenas en esa medida, pretenden articular socialmente los intereses estratégicos del Gobierno en la región.

No quiere esto decir que haya una especie de utilización perversa de las poblaciones indígenas para legitimar las pretensiones económicas privadas en el territorio. No obstante, no son el factor de intervención, el principal motivo de la acción del Gobierno. Sin duda hay un interés del Gobierno por mejorar las condiciones sociales y económicas de la región, lo que implica mejorar también las condiciones de poblaciones indígenas y campesinos. Pero en función de intereses geoestratégicos de carácter económico y político para el Gobierno.

De otro lado, las FARC, y actualmente las Bacrim, son elementos incómodos, factores inconvenientes en los planes estratégicos del Gobierno central. En consecuencia, la estrategia de intervención inicial, como en las demás Zonas de Consolidación, es lograr el control militar, incentivando las desmovilizaciones o potenciando los resultados operacionales (bajas en combate y/o capturas), lo que a la postre significa el deterioro de la capacidad militar de los grupos armados ilegales, forzando a su repliegue, logrando su expulsión del territorio o consiguiendo su aniquilación.

En términos militares, dado el poder y la intervención sistemática de la fuerza pública en la SNSM, se han conseguido los principales resultados. No obstante, por la persistencia del narcotráfico como “joya de la corona” y principal fuente de financiación de la criminalidad organizada y de los grupos armados ilegales la recuperación de la seguridad es parcial.

Así, la recuperación social del territorio, paso subsiguiente a la recuperación militar, se ha venido implementando en medio de la violencia persistente, lo que limita y dificulta su extensión y consolidación. Al mismo tiempo, la desarticulación entre las instituciones locales y de estas con el Gobierno central, a través del CCAI, hacen de la

consolidación del Estado en lo local como un propósito no cercano.

Continúa siendo cotidiana la fragilidad institucional, el fraccionamiento y dispersión del Estado, la parcialidad y favorecimiento de sus servicios. La lógica política de antaño, que entiende el Estado como un “botín político” de ciertos sectores y actores regionales para beneficio particular, no ha desaparecido. La anomalía que impide el funcionamiento del Estado no proviene solamente de los elementos violentos del entorno, también se encuentran en las prácticas secularizadas por la sedimentación de prácticas clientelistas atravesadas permanentemente por la violencia.

En la SNSM la existencia de los “pueblos talanquera” expresa una transacción entre el Gobierno nacional y los pueblos indígenas, que a lo sumo mejora parcialmente ciertas contradicciones y condiciones materiales de existencia, pero que está lejos de significar la consolidación definitiva de la seguridad y mucho menos del Estado de Derecho. Es, en general, una apuesta en el mismo sentido, en cuando al reconocimiento general de la necesidad de construir paulatinamente las condiciones para la paz, o por lo menos la seguridad, el desarrollo y la democracia. En ese orden de ideas, la Consolidación es un horizonte de llegada que comienza a percibirse como un objetivo común, pero que está lejos de realizarse.